

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 204

FECHA: 17 de Noviembre de 2014

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
ARGENTINA	LO QUE VA DEL AÑO	2
COLOMBIA	ABUSOS Y ARBITRARIEDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS CONTRA EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ	5
CHILE	EL ASESINATO DE UN COMUNERO MAPUCHE Y LA RESPONSABILIDAD “POLÍTICA” DE CARABINEROS	7
GUATEMALA	CAMBIAR DE GOBIERNO Y DE MODELO	9
HONDURAS	EE.UU. RECONOCE PARTICIPACIÓN EN GOLPE DE HONDURAS	11
MÉXICO	LOS MENORES Y ADOLESCENTES, IMPORTANTE FUENTE DE INGRESOS PARA LA DELINCUENCIA	12
NICARAGUA	LA MONSTRUOSIDAD DEL CANAL	13
PANAMÁ	EMIGRAR ES UN DERECHO HUMANO	14
PUERTO RICO	AL BORDE DEL JAQUE MATE	15
VENEZUELA	VICTIMAS DE LAS GUARIMBAS	16
	VENEZUELA RECHAZA INJERENCIA DEL JEFE DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN CASO DE LEOPOLDO LÓPEZ	17

ARGENTINA

LO QUE VA DEL AÑO

Un repaso por arriba. Los momentos cruciales, las expectativas cumplidas y las que se frustraron. Es la política, che. La Rosada, el Congreso, los territorios. El tacticismo excitado de los poderes reales, sus mensajes a la oposición. Y algunos detalles más.

En la semana que se inicia se cumplirá un año desde el cambio de gabinete que incorporó como ministros a Axel Kicillof y Jorge Capitanich, desplazando además al hiper secretario Guillermo Moreno. Un nuevo elenco, que agregó figuras con peso propio, lo que explica en cierta dosis el fervor con que son criticados. Fueron y seguirán siendo tiempos interesantes. Quedan por delante cuarenta y cinco días del 2014 y todo, en particular los precedentes, vaticina que serán cálidos y conflictivos.

Un repaso en cualquier recodo del camino (o de la cinta móvil, por ahí) es precario... aun así vale la pena. La conclusión que se anticipa es que el país (y su gobierno, por ende) atraviesa una etapa difícil, acaso la más ardua desde 2003. Los indicadores económicos y sociales no son los mejores de la etapa, no ha sido tiempo de crecimiento ni de recuperación. En la esfera política, el Gobierno conserva centralidad e iniciativa. Acaso no sea paradójico, como parecería a primera vista: el oficialismo es una identidad, un proyecto y una trayectoria. Tal su diferencia con sus adversarios electorales, que no capitalizaron los resultados de 2013 en la medida en que ellos y los poderes fácticos esperaron y anhelan.

El 2014 arrancó con la devaluación, que siempre es acicate de la inflación y juega contra el poder adquisitivo del salario. La jugada, en buena medida forzada por los adversarios pero asumida como propia, envalentonó al poder financiero. Era, en sustancia, un retroceso. Se concretó una embestida que tuvo pretensiones destituyentes: el clásico mix de fuga de capitales, especulación financiera y versiones cataclísmicas. Hubo en la city y zonas de influencia voluntad e ilusión de llevarse puesto al Gobierno. La reacción de éste frenó la ofensiva y la desbarató. El economista Miguel Bein fue, entre los no alineados, quien mejor describió esas semanas cruciales o inolvidables, en alguna medida ya olvidadas.

El kirchnerismo superó el trance y pasó a su momento de mejores expectativas, mayormente en el segundo trimestre. Los acuerdos con el Club de París y Repsol mostraron una idea para ir enfrentando la restricción externa.

Se imaginaba que las convenciones colectivas tendrían una resultante sensata, recobrarían el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

En paralelo, se implementaron medidas novedosas y de gran esfuerzo fiscal para inyectar recursos "por abajo": el programa Progresar y la nueva moratoria para jubilados fueron sus pilares más firmes.

Se confiaba en que las arcas fiscales mejorarían por los ingresos de las retenciones, en particular las de productos agropecuarios.

Ese cálculo pecó de optimismo. Los valores internacionales de las commodities están en baja, la economía brasileña estática. Esos factores de la ecuación pegan mucho en la Argentina. Los productores agropecuarios amarrocaron parte de la cosecha, se jugaron un tute que les salió mal y que también resintió al fisco.

La confirmación del fallo del juez Thomas Griesa empujó la hipótesis de una apertura a los mercados de crédito. Módica, controlada pero apertura al fin. "Recalculando" marcó el GPS y en eso anda el Gobierno.

Las paritarias, efectivamente, no se desbocaron y se pactaron aumentos que acompañaban la inflación, que mermó algo pero que no bajó a niveles tolerables.

La clase fragmentada: El cuadro de situación para los sectores populares refleja la desigualdad interna de la clase trabajadora. Los formalizados sostienen y adecuan sus demandas según el poder relativo de sus respectivos gremios.

La crónica muestra reclamos por “bonus” de fin de año, por reforma del mínimo no imponible de ganancias, por adelanto de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Son planteos sectoriales válidos, que se canalizan por vías institucionales. Varias provincias y algunas municipalidades prometen refuerzos salariales para fin de año. No es éste el lugar ni el momento para hacer un balance general, pero da la impresión que, en trazos gruesos, el sector formalizado la va peleando.

La posición de los demasiados informales y los desocupados es otra, más peliaguda. El Gobierno se esmera en proveer soluciones parciales, mientras se computa mucho tiempo sin reducción del empleo “en negro”.

Los argentinos más humildes son la base social más fiel al kirchnerismo, su comportamiento en las urnas será crucial. Hasta ahora, todo hace pensar que seguirán acompañando al oficialismo que más los mejoró y contempló, como hicieron sus hermanos de clase en Brasil. Pero lo que ocurra en el tiempo que falta para los comicios será clave y es, en cierta medida, indeterminado.

El conflicto social, que siempre es alto en la Argentina, no se espiralizó en el año. Con un movimiento obrero segmentado, con dos centrales opositoras, las huelgas generales fueron menos que las que podían fabularse. Por ahí queda una más.

Casos especiales como el de la empresa Lear no tuvieron muchos símiles. La brutal represión a los laburantes agravó la situación. El conflicto, pese a ese aporte deplorable del oficialismo, quedó circunscripto.

La movilización y la acción directa son intensas, como siempre, con pocos casos comparables en el mundo. El rango es parecido al de años anteriores.

La gobernabilidad perdura, el Gobierno no renguea como pato, ni cede iniciativa. Controla la agenda pública y el Congreso, es hiperactivo puesto a legislar.

La legitimidad del kirchnerismo es históricamente envidiable, fue convalidada durante un largo lapso. Y no cae en tirabuzón. Antes bien, mejoró su posición relativa desde las parlamentarias. De nuevo, no es asunto de magia ni estamos ante algo inexplicable: es el uso del capital político y simbólico acumulado. Lo potencia el manejo firme del poder, que no se resigna.

- - -

Casa Rosada, Congreso, provincias, su ruta: Las lecturas enfocan a la Casa Rosada: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “mide” bien, su imagen positiva es altísima para quien conduce al oficialismo tras once años en el poder. Lidera su fuerza, concita adhesiones inusuales en sectores juveniles. La restricción constitucional pone una valla alta a su influjo, claro.

El sentido común dominante describe las internas peronistas como sanguinarias y destructivas. La del Frente para la Victoria (FpV), incipiente por cierto, va desmintiendo la leyenda negra. Las incógnitas sobre los candidatos son un dilema para el oficialismo, el modo de sustanciarlas no lo debilita.

Vale la pena pispear más allá de la Plaza de Mayo, por ejemplo a las provincias o al Congreso Nacional. El FpV no se desangró ni lo dañaron fugas masivas.

Los grandes medios y los poderes fácticos se percatan y se enardecen en consecuencia. Regañan con brutalidad a “sus candidatos”, esto es a las tres vertientes opositoras más votadas un año atrás. Los conminan a unirse, a hacer alquimias electorales. Los más sensibles a la requisitoria son, de momento, el PRO de Mauricio Macri y la fracción dominante del radicalismo.

La lectura del establishment es táctica. Se clava en la foto diaria de un universo magmático en el que todo cambia o todo puede cambiar. La exigencia es una estrategia quizás prematura, pasible de fallar. Varios referentes de “la opo”, en particular los integrantes del Frente Amplio-Unen, corren para complacer las órdenes. La unidad ante un oficialismo descripto como cuasi dictatorial es una

bandera posible. Combinarla virtuosamente con las razonables ambiciones de los partidos es un desafío complicado.

- - -

La mayoría subsistente: Vamos al Congreso, por un rato. El FpV se basta para armar mayoría en ambas Cámaras, con aliados estables y otros contingentes, conseguidos ad hoc en cada votación. La réplica opositora es tachar de inconstitucionales todas las normas (too much) y prometer que las derogarán en su momento. Chirle promesa para una sociedad civil demandante... y para colmo difícil de honrar. Es temprano para hacer simulaciones electorales pero no para pegarle un vistazo a la integración de las Cámaras, en especial la alta, de la que partirán los senadores elegidos en 2009, año propicio para la oposición.

FA-Unen es el ejemplo más llamativo: arriesga 12 bancas de las 19 que conserva. Y no tiene "pinta" de sostenerlas. El FpV en cambio, pone en juego apenas nueve.

Un detalle sintomático para el futuro: el FpV tiene amplias chances de conservar la primera minoría en el Senado casi con cualquier resultado. Ni hablar de tener el tercio suficiente para ser decisivo para la cobertura de la vacante en la Corte Suprema. Los radicales anuncian que vetarán a cualquier candidato que proponga el kirchnerismo. Mala praxis que garantiza mayor lentitud en el Tribunal, dificultad para formar mayorías, necesidad de apelar a espasmódicos conjueces motivando incerteza y, acaso, jurisprudencia zigzagueante. Las disfunciones no terminan ahí: es factible que la UCR y sus aliados disminuyan su gravitación en el Senado el año que viene, con lo que su discurso sería pura parada que resiente el funcionamiento de otro poder del Estado. Fea la actitud.

- - -

Disciplina y debates: La disciplina de bloque no es, como el dulce de leche o el campeonato de 30 equipos, un invento argentino. Abunda en la experiencia comparada, en la mayoría de las consagradas democracias europeas. El FpV la tuvo siempre, anche cuando jugó a la defensiva (2008-2012). También se da maña para concitar adhesiones. Es otra destreza que sulfura a los adversarios, quienes camuflan su impotencia con alusiones berretas a "la escribanía"... en la que las uvas están verdes.

En ese contexto, el kirchnerismo se permite disensos internos, que no son reconocidos como virtud sino como prueba del fin de ciclo. Tal vez no sea del todo así... quién sabe. Repasemos algunos ejemplos cercanos.

El tratamiento en comisión de un proyecto de despenalización del aborto tuvo nutrida presencia kirchnerista, aunque es consabido que la Presidenta rechaza la propuesta.

En esta semana, los diputados Adriana Puiggrós y Jorge Rivas, de dilatada y congruente trayectoria, objetaron el proyecto de creación de la Universidad de la Defensa, que el oficialismo impulsó y aprobó.

El proyecto de Código de Procedimiento Penal es otro ejemplo de ductilidad relativa. El kirchnerismo contempló en comisión críticas opositoras a una potencial catarata de designaciones de fiscales. También suprimió la "conmoción social" como factor agravante de la situación de los procesados, un disparate contenido en la propuesta del Ejecutivo.

Queda en pie, dentro de un proyecto promisorio, el artículo 35 que discrimina negativamente a los inmigrantes. La redacción se modificó, sin beneficios patentes. Lo que corresponde es la supresión para que continúen en plena validez las leyes vigentes, en particular la dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner. En el régimen actual no hay impunidad para quienes delinquen, entiendo como tales a quienes han sido condenados por sentencia firme. En esos casos, la deportación es aplicable cuando se ha cumplido la mitad de la condena. Hacerlo en situaciones viscosas, a quien es técnicamente inocente, aumentando el poder de prepo de las policías es una incoherencia que debe ser dejada de lado. Hay polémica dentro del oficialismo, ojalá que se dirima de la mejor manera.

- - -

Balconeando a los vecinos: En el fluir de los meses, los grandes medios locales se excitaron con la perspectiva de derrotas de los gobiernos populares de Brasil y Uruguay, ya resignados a la formidable victoria del presidente boliviano, Evo Morales. Divulgaron y creyeron los embustes sobre un batacazo de Marina Silva contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Después se excitaron con Aécio Neves. No les fue bien en el vecindario. Tarde pero seguro, advierten que un esquema se repite, más allá de las particularidades enormes e irrepetibles de cada país. Hasta en un momento menos auspicioso, esos gobiernos conservan adhesiones masivas y quedan enfrentados a una opción situada a su derecha. Usualmente un “frente del rechazo” que aglutina componentes dispares.

Cada comarca tiene su historia y ninguna calca la de otra. La tendencia general, con todo, sirve para captar qué se piensa y qué ocurre por acá cerca. Ayuda a comprender la desesperación de ciertos dueños del poder en la Argentina y la consistencia del oficialismo, que se reseñan en las líneas anteriores.

Las cruciales elecciones por venir tienen final abierto, muy abierto. En la ancha avenida opositora eran pocos los que imaginaban eso, pongámosle un año ha.

Mario Wainfeld - Página 12

COLOMBIA

ABUSOS Y ARBITRARIEDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS CONTRA EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

“LA GUERRA ES LA PAZ LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD LA IGNORANCIA ES LA FUERZA”
en 1984, G Orwell

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la retención arbitraria por parte de Las Fuerzas Armadas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega asentadas en Remolino del Caguán, departamento del Caquetá, del defensor de derechos humanos JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ, quien se encontraba en esta región, antecedida de su presencia en el departamento del Putumayo, en desarrollo de sus responsabilidades investigativas como asistente de investigación de integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas (CHCV), acordada entre el gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS y la delegación de Paz de la guerrilla de las FARC-EP en La Habana.

Nuestra Constancia Histórica ante la continuidad del desarrollo de operaciones militares sustentadas en la mentalidad del enemigo interno y ante la ampliación de esa ideologización a quienes puedan tener alguna relación investigativa, solidaria con los habitantes que permanecen en regiones de conflicto armado, que afirman iniciativas ambientales, agroecológicas, diferentes o diversas a las definiciones del uso que plantean las políticas institucionales.

Nuestra Constancia Histórica de los abusos sufridos por un ciudadano, que legalmente, está prestando su concurso para la solución del conflicto armado, como JOSÉ ANTONIO, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Dublín (University College Dublin). El investigador y defensor de derechos humanos ha participado por varios años en el área de derechos humanos y en la solidaridad con organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas de base, entre ellas, las asociadas en FENSUAGRO, y la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, y nuestra Comisión, y en su papel de asistente de investigación en la metodología de trabajo participativo y de corroboración de las fuentes escritas se ha desplazado durante días de la semana a las regiones para dar sustento o desvirtuar hipótesis y tesis del trabajo investigativo.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de los hechos ocurridos con ocasión de la visita a comunidades y dirigentes comunales de Remolino.

*Martes 28 de octubre a la 1:00 p.m., JOSÉ ANTONIO viajó a Remolino pasando por dos retenes militares, uno en Cartagena del Chairá y el otro en Peñas Coloradas. En ambos retenes JOSÉ presentó su documentación a los militares. A su ingreso en jurisdicción de la Inspección de Remolinos no había presencia de la fuerza pública *Miércoles 29 de octubre a las 10:30 a.m.

mientras el defensor investigador se reunía con pobladores y la Junta de Acción Comunal, se produjeron dos sobrevuelos de helicópteros sobre la escuela en que se encontraban reunidos. El inusual sobrevuelo causó zozobra en los habitantes de la región por coincidir justo en el lugar y hora de la reunión comunitaria con el investigador de la CHCV.

*Jueves 30 de octubre a las 7:00 a.m. la embarcación en que JOSÉ regresaría a Cartagena de Chairá fue retenida por un lapso de más de una hora, sin autorizar la partida. 10 minutos después que la Armada autorizó su navegación, río arriba, fue interceptada por una piraña artillada, causando temor entre los pasajeros. Los efectivos regulares dieron la orden de retornar a Remolino. En Remolino, JOSÉ ANTONIO fue retenido e interrogado por más de tres horas y media, aproximadamente hasta las 12 del mediodía. A esa hora, el Capitán ESTRADA le permitió a JOSÉ retirarse. La razón oficial del interrogatorio y la retención de JOSÉ fue el no haberse registrado al ingresar a Remolino. El militar desconoce que no hay obligación constitucional de hacer ninguna presentación al ingreso a alguna localidad. El regular desconoció que no había presencia militar en el momento de la llegada de JOSÉ a Remolinos y que se había registrado en dos retenes fluviales anteriores. Los regulares sostuvieron que como JOSÉ estaba en una “zona roja” debían confirmar su identidad por su seguridad, pese a tener todos sus documentos en regla.

*Viernes 31 de octubre aproximadamente 9:00 a.m. en Peñas Coloradas, JOSÉ fue abordado por efectivos de la Brigada Móvil 22 quienes le interrogaron acerca de las razones de su viaje.

Más adelante, en el puesto de control de Cartagena de Chairá, unidades militares abordaron a JOSÉ. Un agente, vestido de civil, que se identificó como integrante de la brigada Móvil 6, volvió a interrogarlo de forma intimidatoria. Posteriormente, le expresó a JOSÉ que debía regresarse lo más rápidamente a Bogotá. De acuerdo con algunas fuentes locales, que por temor, no se atreven a hacer públicos sus nombres, el motivo de la acción militar contra JOSÉ era la búsqueda, como extranjero, de órdenes de captura o procesos penales abiertos por estar apoyando a las comunidades rurales.

Nuestra Censura Ética ante las consecuencias de una mentalidad militar que concibe a lo diferente como “enemigo militar”, concepción que genera procedimientos absurdos, justifica abusos y violaciones de derechos humanos sobre los líderes y comunidades rurales que habitan en zonas de conflicto, y sobre defensores de derechos humanos o investigadores. Nuestra Censura Ética ante la continuidad de una política de represión contra pobladores en el Medio y Bajo Caguán que ha sido documentada y confirmada en el proceso de corroboración e investigación de JOSÉ. Montajes judiciales, detenciones masivas, empadronamientos, restricciones a la libre movilización, a la alimentación, asesinatos de dirigentes sociales, una extensa red de informantes que a cambio de dinero inventan historias. Nuestra Censura Ética ante la incapacidad militar de desmontar las estructuras paramilitares que operan en determinados espacios territoriales de la región lo que se convierte en un altísimo factor de riesgo a los derechos y libertades de las comunidades y líderes sociales, como ha ocurrido recientemente con MISAEL CARO amenazado por paramilitares conocidos como Águilas Negras.

Mientras estructuras armadas institucionales pretendan justificar sus abusos y violaciones de derechos humanos por la persecución a la guerrilla de las FARC-EP, ninguna confianza ni reconstrucción del Estado de Derecho será posible; mientras la omisión, la tolerancia y complicidad con operaciones paramilitares sea otra regla de juego, ilegal, contra los civiles, difícilmente se asentará un paz real. Nuestra Censura Ética ante el preocupante acoso, persecución y seguimiento que hemos conocido viven los líderes comunitarios JORGE VEGA, de ASTRACAMCAG (filial de Fensuagro), MISAEL CARO PACHECO (ASOJUNTAS) y HAUNER RESTREPO (ASOJUNTAS), en Cartagena del Chairá, así como de ALEXANDER DIAZ de la Junta de Acción Comunal de Remolino.

La retención de JOSE ANTONIO después de haberse reunido con estos dirigentes comunitarios, es prueba del déficit de garantías para los dirigentes sociales bajo la llamada consolidación militar, así como el grave riesgo al que están expuestos. Si el pretexto era la seguridad del defensor, ¿por qué las fuerzas armadas no brindaron garantías para su evacuación pronta de la región y sí obstaculizaron su movilidad?

Ante este hecho contra el investigador y defensor de derechos humanos, JOSÉ ANTONIO, nos asiste una profunda preocupación por las garantías a la vida e integridad, libertades de los dirigentes comunitarios del Medio y Bajo Caguán; nada de lo ocurrido pareciera indicar que se brindan garantías para la labor en terreno de investigaciones en el marco de las conversaciones de paz y mucho menos que se esté aclimatando la construcción de un ambiente para la salida del conflicto armado.

Esperamos que este escrito permita a ustedes, conforme a sus responsabilidades institucionales adoptar cuantas medidas sean necesarias, para esclarecer los hechos aquí consignados y sobre todo posibilitar que los líderes y comunidades del Caguán, puedan continuar habitando en sus tierras, con sus apuestas de vida comunitarias, solidarias, agroecológicas y ambientales.

Con profunda preocupación,

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

CHILE

EL ASESINATO DE UN COMUNERO MAPUCHE Y LA RESPONSABILIDAD “POLÍTICA” DE CARABINEROS

En cada siniestro y cobarde asesinato que ha ocurrido en territorio Mapuche de comuneros, en el marco de conflictos de tierras ancestrales y que ha significado la responsabilidad directa de ciertos agentes policiales del estado, como ocurrió con el asesinato de Alex Lemun con un disparo en la frente y que involucró a un oficial de la institución que quedó impune. Los asesinatos de Jaime Mendoza Collio y Matías Catrileo, por la espalda y que involucró a dos integrantes del GOPE (Grupo de operaciones policiales especiales de carabineros), la institucionalidad de carabineros ha tratado de encubrirlos, refiriéndose a “enfrentamientos” y dando fe a falsas coartadas señaladas por los hechores.

Asimismo, coincidentemente, principalmente desde las directrices del diario el mercurio (Emol) de Agustín Edwards, un civil que sigue en la impunidad a pesar de todas sus responsabilidades en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar y de los montajes, conspiraciones y cortinas informativas para menoscabar y desviar las atenciones de situaciones de fondo con respecto a las movilizaciones y protestas sociales que exigen reparaciones de tierras, situándolas Edwards como “terrorismo Mapuche” o “violencia rural”, sigue siendo activo en dar cobertura a encubrimientos de los asesinos de jóvenes Mapuche.

El miércoles 29 de octubre de 2014, fue asesinado a metros de la puerta de su casa el comunero mapuche Víctor Mendoza Collío en la comunidad Requém Pillán, al interior de la localidad de Pidima, comuna de Ercilla, IX región. El comunero recibió un disparo mortal de escopeta en la clavícula. Mendoza era werken de su comunidad que se encontraba en un proceso de recuperación de tierras ancestrales. Según su familia y miembros de la comunidad esto se trató de un asesinato perpetrado por desconocidos y no por una riña o enfrentamiento entre comunidades como se ha dicho.

Por su parte, medios comerciales informativos señalaban que el hecho se habría tratado de “un conflicto entre comunidades”. El diario el Mercurio publicaba: “La policía pesquisaba esta noche un incidente ocurrido en una zona cercana a Ercilla, en la Región de La Araucanía, en el que resultó muerto un comunero mapuche”. Agrega: “La víctima fue identificada como Víctor Manuel Mendoza Collío, de 46 años de edad. Falleció en el área de la comunidad Requén Pillán”. Continúa señalando: “De acuerdo a los primeros reportes desde la zona, el hecho se relacionaría con un enfrentamiento entre comunidades indígenas”.

Cabe consignar que Rodrigo Melinao Licán, fue asesinado el 6 de agosto del 2013. Asesinato que aún sigue impune. Rodrigo fue rematado en cercanías de su casa ubicada al interior de la comunidad Rayen Mapu, en proceso de recuperación territorial, del Lof Lolokos, en el sector de

Pidima, comuna de Ercilla. Su cuerpo fue encontrado por su familia con impactos de escopeta, en el mismo lugar se encontraron los cartuchos y se estableció que le dispararon a poca distancia.

¿Qué se desprende?

Los asesinatos de jóvenes y comuneros Mapuche se han enmarcado con el propósito de instalar al interior de las comunidades estados de pavor. Asimismo, de polarizar y generar un ambiente de mayor tensión en los territorios donde se están sosteniendo procesos de recuperaciones de tierras por parte de comunidades Mapuche y que involucra los intereses de latifundistas de corte colonialistas y de empresas forestales, aliados de Agustín Edwards, dueño del Mercurio. El ambiente termina por perpetuar mayores actos represivos y mayor presencia de agentes policiales militarizados en los territorios.

Nuevamente aparecen cortinas que buscan desviar la atención sobre posibles responsabilidades. La ligereza de medios irresponsables en situar los hechos como “enfrentamiento entre comunidades indígenas”, como vocifera el Mercurio y otros medios que replican, no aparecen como actos casuales o de incompetencia periodística, sino como actos planificados.

Los hechos nuevamente ocurren en zonas donde existe una alta presencia y control policial, por parte de fuerzas represivas de carabineros y, quienes principalmente se han salido de todo protocolo y procedimiento en allanamientos o desalojos, han sido principalmente integrantes del GOPE.

Cabe consignar que para el asesinato de Jaime Mendoza Collio el 12 de agosto del 2009, quien participaba desarmado de las acciones pacíficas en los procesos de recuperación de tierras y que involucraba los intereses de empresas forestales como Mininco y Arauco, fue perseguido por varios kilómetros para luego ser asesinado con disparos por la espalda. Su asesino, Miguel Jara Muñoz, miembro del GOPE (Grupo de operaciones policiales especiales de carabineros).

El diario El mercurio dio amplia cabida a la tesis del “enfrentamiento” y al actuar del carabinero en legítima defensa. Un año más tarde, ante las comprobaciones de montaje y alterar medios de prueba, el medio de Edwards daba cabida informativa al general de carabineros de la zona: “El nuevo general jefe de la Novena Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic, descartó la existencia de un montaje por parte de personal del GOPE en la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, ocurrida en 2009 durante un enfrentamiento”, publicaba así el 24 de noviembre del 2010.

De acuerdo a las pericias e investigaciones, el GOPE había disparado su propio casco y chaleco antibalas para hacer creer que había sido un enfrentamiento. El Mercurio y el general Bezmalinovic, hoy represor en la Región de Bio Bio, insistían en que había sido un “enfrentamiento” y en “legítima defensa”.

Situación muy similar ocurrió con Matías Catrileo, asesinado por la espalda por el GOPE Walter Ramírez. El Mercurio publicaba el 4 de enero del 2008: “Comunero mapuche, Matías Catrileo, muere en enfrentamiento con Carabineros en el sector de Vilcún, en la Novena Región”.

Lo ocurrido con Rodrigo Melinao el 2013 y ahora con Víctor Mendoza Collio, se trataría de un nuevo modus operandi y que involucraría a asesinos mercenarios de alta preparación para escabullirse, actuar en la noche y matar cobardemente.

¿Qué relaciones mantienen ciertas jefaturas del GOPE y de Carabineros con Agustín Edwards dueño del Mercurio y presidente de la Fundación Paz Ciudadana?

¿Qué relación hay con unos panfletos aparecidos hace algunas semanas en la zona de Arauco (Región del Bio Bio) con el símbolo de patria y libertad, anunciando el asesinato o mutilación de “cualquier Mapuche”?

Es inconcebible que Gustavo Villalobos, actual director de la agencia nacional de inteligencia, continúa en su cargo, no solamente por incompetencia al no precisar y dirigir análisis e investigaciones al interior de ciertos poderes fácticos y mercenarios, sino a esta altura, por tantos años de complicidad, al no aportar en lo absoluto al esclarecimiento de evidentes contubernios entre ciertos sectores empresariales con agentes estatales policiales en los asesinatos de comuneros Mapuche.

Más de alguien dirá que no es prudente realizar tesis o conjeturas y polarizar aún más el ambiente, aunque sea evidente las responsabilidades, sin embargo se guarda silencio cuando ciertos agentes, sicarios y Agustín Edwards, conspiran, mienten y acusan falsamente a integrantes del Pueblo Mapuche movilizado.

Fuente: Alfredo Seguel. Mapuexpress

GUATEMALA

CAMBIAR DE GOBIERNO Y DE MODELO

Las recurrentes denuncias contra funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Patriota evidencian la corrupción política y cuestionan un Estado y un poder contruidos sobre el desprecio de las leyes y la democracia, con rasgos militares y autoritarios.

Septiembre y octubre de 2014 representan el bimestre *horrible y oscuro* del Presidente Pérez Molina. En estos dos meses se suceden la captura de Byron Lima (aliado político del Presidente) por pertenencia a estructura criminal; las acusaciones a Gudy Rivera, fundador del Partido Patriota y expresidente del Congreso, por ejercer presiones para favorecer a *sus magistrados* en la Corte Suprema de Justicia; las denuncias de enriquecimiento ilícito de la Vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Molina; el involucramiento de funcionarios de la Municipalidad de Mixco (regentada por el hijo de Pérez Molina) en agresiones a diputados; la cancelación temporal del Partido Patriota y la remoción de su Secretaria General (y Vicepresidenta de Guatemala) debido al incumplimiento de la ley electoral; las acusaciones por corrupción en la persona de Jorge Villavicencio (*exministro estrella de Salud*) y la contradenuncia de Villavicencio a la Vicepresidenta; la acusación al jefe del área de salud de Huehuetenango y a la diputada patriota Emilenne Mazariegos, por reparto de recursos públicos...

Las denuncias, contundentes y duras, revelan actorías criminales y formas de ejercer el poder impropias y espurias. Entre otras:

participación de grupos paralelos y clandestinos en la conducción del Estado y en la definición de políticas del Ejecutivo (caso Lima Oliva): es decir, el *poder político aliado y/o subordinado al poder criminal*;

control del sistema de justicia por *actores e intereses privados* (caso Gudy Rivera, Comisiones de Postulación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia);

lucha contra la *corrupción casuística y parcial* : vendetta y disputa de poder (caso que involucra al ex ministro de Salud);

concepción del Congreso y en general la *cosa pública* como *instrumento de negocios y poder personal* (caso Emilenne Mazariegos y negociación de plazas de salud);

gobierno de impunidad y rechazo al Estado de Derecho (campana electoral anticipada).

Ante las denuncias, el Presidente cruza líneas rojas: niega los hechos con argumentos demasiado cercanos a la mentira; ataca a los denunciantes con agresividad impropia; apoya a los denunciados, no bajo el principio de la presunción de inocencia sino negando la validez de las acusaciones, como si fuera investigador y juez; acusa al mensajero y propone concluir sin prórroga el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG (pieza clave en las investigaciones mencionadas y otras estratégicas: financiación de partidos políticos y corrupción en aduanas); insiste en el desprecio de la ley, al proseguir de forma ilegal y ostentosa con la campana electoral anticipada.

El interés presidencial es obvio: una a una -y todas juntas- las denuncias apuntan a su círculo más cercano de relaciones políticas y amistad. La persecución penal al Presidente no debería estar lejana.

Las denuncias que estrechan círculos alrededor del Presidente y su partido, configuran un escenario de tensión extrema, en el que abundan los rumores de golpe de estado y no se descartan soluciones de fuerza. El actual gobierno, operador de sectores poderosos (económicos, internacionales, militares) comienza a ser percibido por parte de esos sectores como obstáculo y factor de inestabilidad. Por igual, la sensación de acorralamiento, la pretensión de consolidarse en el gobierno, y la oposición a este escenario, alientan reacciones violentas.

La reelección presidencial o ampliación del periodo, la judicialización (de la oposición o los gobernantes, reactivando por ejemplo el caso del *harinazo a Baldetti*, que involucra a Líder), las negociaciones de todo tipo, las reformas de leyes o reforma constitucional que definan nuevas reglas de juego, la violencia física, la disolución del Congreso y del sistema de justicia (o su definitiva instrumentalización), el *golpe clásico*, se perciben como acontecimientos posibles y cercanos: para modificar la actual composición del poder o para fortalecerla.

Disputas de poder y regeneración democrática

Las voces que responden a hartazgo ciudadano y plantean la regeneración democrática (algunos abogados, algunos periodistas, movimientos sociales, algunos empresarios) son cada vez más visibles y fuertes –por tanto, nada desdeñables- pero todavía minoritarias. Muchos de quienes acusan hoy al Partido Patriota y al gobierno fueron sus grandes valedores hasta hace días. Estos sectores no pretenden recuperar la dignidad y el sentido de la acción política, sino disputar y preservar espacios de poder, para seguir haciendo lo mismo.

Esto implican los acontecimientos recientes: una aguda disputa, prólogo de las elecciones generales de 2015 y consecuencia de la colusión de intereses de actores aglutinados alrededor de la economía tradicional, la economía emergente, la economía criminal y la economía transnacional.

Está en juego el reparto de negocios y poder político, en un contexto de disputas múltiples, que enfrentan a oligarquía y nuevos ricos (la economía criminal moviliza más o iguales recursos que la economía tradicional y exige nuevas cuotas de poder), capital transnacional y capital nacional (las empresas transnacionales son el poder determinante), oligarquía y ejército (ampliación de espacios de decisión y actoría pública de éste).

Estas disputas no son nuevas, pero involucran hoy un importante reacomodo de fuerzas y tensiones diferentes. La intensidad de las mismas conlleva que las elecciones *pueden no estar funcionando* como mecanismo de reconfiguración del sistema. La crisis y adaptación del capitalismo, la pérdida de influencia de opciones progresistas en Latinoamérica, y el fortalecimiento de opciones violentas y antidemocráticas a nivel global añaden otro elemento de tensión.

Desde abajo: cambiar el modelo

Las confrontaciones internas no cuestionan el eje de un Estado construido para minorías: de hecho, invisibilizan esta problemática. No proponen la recuperación del ejercicio de derechos. No fortalecen y legitiman la participación ciudadana. Atacan la corrupción si no se ven favorecidos por ella. Plantean soluciones superficiales: cambios en procedimientos, en algunas leyes, en el gobierno o el congreso.

Mientras estas disputas se definen, el proyecto empresarial-militar no descansa: convoca nuevos proyectos extractivos (gasoducto); legisla para institucionalizar el despojo (ley Monsanto, ley tigo, ley de competitividad, acuerdos de libre comercio); propone reformas constitucionales para reconfigurar el sistema, en la lógica de recorte de libertades y fortalecimiento de los derechos mercantiles.

Lo preocupante es que la intensa actividad política de estos meses margina una agenda construida sobre necesidades sociales y se centra en la garantía de impunidad como foco de la acción del ejecutivo y otros poderes (pactos legislativos, sistema de justicia).

El reto es construir un análisis estructural de la crisis que trascienda la venalidad gubernamental y de otros actores (Congreso de diputados, abogados) y visibilice un Estado y un poder político construidos para el negocio, a través de la criminalidad: las incoherencias y debilidades de un Estado configurado para el beneficio de pequeños sectores de poder, excluyente, autoritario, violento y criminal.

Se vuelve perentorio denunciar las soluciones autoritarias que no resuelven la crisis actual, sino la reconducen a favor de actores tradicionales.

Es imprescindible redefinir la agenda política, hoy dominada por la impunidad, la corrupción, los pactos y peleas de élites, el autoritarismo antidemocrático, el individualismo: hacia el ejercicio de derechos, la ampliación de la democracia, la reorientación del modelo económico, la plurinacionalidad, la solidaridad, la colectividad, la denuncia de las arbitrariedades y la reconstrucción desde propuestas de dignidad, honradez, democracia y legalidad.

No se trata nada más de cambiar este gobierno (o este Congreso, o este sistema de justicia), por mucho que su lugar en la historia esté más cerca de la cárcel que del altar. Son el Estado, el poder político y el modelo económico y social los llamados a sentarse en el banquillo de los acusados: aunque mediáticamente pasaron desapercibidos, el inicio de los juicios por la masacre de la Embajada de España y por violaciones sexuales cometidas por el Ejército como política de estado durante el conflicto armado, abonan a esta idea.

Estamos en un momento crítico, que puede derivar en la renovación y profundización del autoritarismo, o en el parte aguas para la construcción de relaciones democráticas, horizontales, de un modelo político y económico de raíz comunitaria, centrado en los derechos de la naturaleza y las personas.

Tenemos que transformar el modelo de organización y de vida.

Fuente: Andrés Cabanas. Rebelión

HONDURAS

EE.UU. RECONOCE PARTICIPACIÓN EN GOLPE DE HONDURAS

Hillary Clinton reveló que influyó para impedir que Manuel Zelaya regresara a la presidencia, luego del derrocamiento en junio de 2009.

En su libro Decisiones Difíciles, la exsecretaria de Estado del Gobierno de Barack Obama, Hillary Clinton confiesa que influyó en el hemisferio para que Manuel Zelaya no regresara a la presidencia luego del golpe militar de 2009. La exsecretaria del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton, reveló que influyó en Honduras para impedir que Manuel Zelaya regresara a la presidencia, luego del derrocamiento en junio de 2009.

Hillary admitió que “en los días siguientes del golpe hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria Patricia Espinosa en México con el objetivo de organizar “rápidamente” unas elecciones que tuvieran como resultado hacer irrelevante la cuestión de Zelaya”, de acuerdo con las confesiones plasmadas en su libro Decisiones Difíciles publicado este año.

Esta revelación de Clinton fue objeto de análisis para el politólogo, Mark Weisbrot, quien publicó un artículo en el que menciona que la exsecretaria del gobierno de EE.UU. reconoció que utilizó el poder para asegurarse que Zelaya no volviera a la Presidencia”.

“La cuestión de Zelaya era cualquier cosa menos irrelevante, pues líderes de América Latina, la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales reclamaron vehementemente su regreso inmediato a la oficina. Se ha erosionado la cálida bienvenida y el beneficio de la duda que incluso los gobiernos de izquierda de la región le habían ofrecido a la recién instalada Administración de Obama unos meses antes”, destacó el también presidente de la organización diplomática Just Foreign Policy.

“La tasa de homicidios, ya la más alta del mundo, aumentó en un 50 por ciento de 2008 a 2011; la represión política y los asesinatos de los candidatos políticos de la oposición, organizadores campesinos, y activistas de la comunidad homosexual aumentaron y continúan (...) las fuerzas de seguridad en Honduras también han participado en una ola de asesinatos y otros crímenes contra los derechos humanos con impunidad”, sentencia Mark en su artículo.

El 28 de junio de 2009, un comando de militares desalojó a Zelaya de su vivienda con bombas lacrimógenas y lo secuestró y trasladó en un avión a la vecina Costa Rica. Aunque muchos expertos de América Latina dijeron que el autor intelectual del golpe era Estados Unidos, el Gobierno entrante utilizó acusaciones falsas de manipulación de la Constitución para justificar la salida de Zelaya, quien fue expulsado del país.

Fuente: <http://telesurtv.net/news/>

MÉXICO

LOS MENORES Y ADOLESCENTES, IMPORTANTE FUENTE DE INGRESOS PARA LA DELINCUENCIA

Las niñas, niños y jóvenes del país representan una fuente de ingresos millonarios para las bandas del crimen organizado, quienes ven en ellos un grupo totalmente vulnerable para el reclutamiento forzoso, el trabajo esclavo y la trata con fines de explotación sexual, como parte de un fenómeno poco estudiado en el cual las autoridades no ayudan a las víctimas, sino que las criminalizan.

Esto advirtió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien señaló que los menores de edad también son vistos por las autoridades como blanco para obtener dinero de forma ilegal, sobre todo mediante extorsiones para no enviarlos al reclusorio.

“El crimen organizado encuentra en los niños y jóvenes una importante fuente de ingresos por esclavitud sexual, tráfico de órganos y trabajo forzado en el procesamiento de drogas, como en el ‘triángulo dorado’ en la sierra de Durango, donde se sabe que se llevan a adolescentes campesinos para levantar la cosecha, y su pago es no matarlos”, detalló el especialista en un encuentro con diversos medios de comunicación.

Aunque no hay datos oficiales sobre la cantidad de menores que son víctimas de explotación por grupos del narcotráfico, existen cálculos conservadores, basados en estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de académicos especializados en seguridad, como Edgardo Buscaglia, que indican que esa cifra podría ser de alrededor de 30 mil.

Entre las formas más utilizadas por el *narco* para cooptar a los jóvenes u obligarlos a pertenecer a sus filas, agregó Pérez, es darles dinero y teléfonos celulares con acceso ilimitado a Internet, a cambio de que informen sobre cualquier movimiento en las zonas de influencia del crimen organizado.

Otro nivel de implicación es cuando las familias de los niños y jóvenes ya están involucrados tradicionalmente en la delincuencia y los menores se ven obligados a llevar este mismo tipo de vida. Muchos otros se ven presionados para ser parte de estos grupos, sobre todo en secundarias y bachilleratos, y si denuncian, los matan, expresó.

Pero no sólo los criminales lucran con los jóvenes, sino también las propias autoridades gubernamentales, cuyos agentes suelen detener a jóvenes de escasos recursos, con cierto tipo de vestimenta, para sembrarles droga o simplemente acusarlos de cualquier delito y luego exigirles dinero para no llevarlos a la cárcel.

“Muchos policías ven en ellos una posibilidad de hacerse de dinero. En las agencias del Ministerio Público hay un gran negocio de pago de fianzas para no mandar a los jóvenes al reclusorio, sobre todo a los que reivindican cierta identidad, como los llamados *reguetoneros*”, dijo.

Hay datos estadísticos que comprueban que los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la violencia, entre ellos que la mitad de los casos de *feminicidio* en todo el país son de adolescentes de 15 y 17 años de edad, o que 65 por ciento de los hombres presos en cárceles del Distrito Federal son menores de 25 años.

En México tenemos entre 13 y 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando un nivel normal sería de sólo 10 por cada 100 mil, pero ese número puede subir hasta 40 por cada 100 mil en

estados como Chihuahua y Guerrero, hablando sólo de asesinatos de adolescentes. Esta epidemia no se va a solucionar de un día para otro, pero lo primero es abatir la impunidad, señaló.

Tomado de La Jornada

NICARAGUA

LA MONSTRUOSIDAD DEL CANAL

Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua.

El presidente Daniel Ortega con el poder omnímodo que él y su mujer tienen sobre este país, hizo que el Congreso Nacional aprobara en un solo día la creación de una ley para la construcción de un Canal Interoceánico. Esta ley no fue consultada en absoluto con la población. Al día siguiente de aprobada la ley fue otorgada una concesión con rapidez vertiginosa, a pesar de que afectará a Nicaragua por más de cien años, y la concesión fue hecha a un chino hasta entonces desconocido de nombre Wang Jing. La concesión solo otorga derechos a Wang Jing pero no le impone ninguna obligación.

La concesión se hizo sin que hubiera ningún estudio previo según ha dicho el propio presidente Ortega. La concesión establece que toda la información sobre la construcción del Canal será confidencial. La concesión, que se ha hecho sin licitación alguna, incluye un aeropuerto, dos puertos, un ferrocarril y dos zonas francas de libre comercio.

Toda la geografía nacional se ha entregado para que estas obras se realicen donde Wang Jing quiera y tendrá todos los permisos que se necesiten cualquiera que sean sus decisiones. Tendrá toda licencia, permiso o autorización que demande.

Ni un solo centavo recibirá el Estado de Nicaragua en concepto de impuestos o gravámenes por ninguna de las obras. Según el acuerdo que se firmó la empresa china está fuera de toda normativa nacional, libre de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, aun cuando incumpla con sus obligaciones. La ley es contradictoria en muchos aspectos de nuestra Constitución Política. También contradice otros proyectos que tal vez serían más rentables a largo plazo el cortar en dos el corredor turístico del Pacífico.

El afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este Canal y sus Proyectos Asociados son la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en toda su historia. Ha denunciado también que esta concesión exime a todos los Proyectos Asociados del cumplimiento de la legislación ambiental exponiendo al país a una destrucción ecológica irreversible.

El Estado de Nicaragua recibiría el uno por ciento de las acciones cada año, y hasta los cien años llegaría a tener el ciento por ciento de ellas. Con cada barco que pase, enorme cantidad de agua dulce se iría al mar. El Gran Lago solo tendrá una utilidad: la navegación. No podremos producir alimentos mediante riego, solamente podremos ver pasar barcos.

Tampoco se podrá beber el agua del lago. También hay que tomar en cuenta que son muchos los que viven de la pesca en el lago y ya no la podrán tener. Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas serán entregadas a un chino.

A los dueños de las tierras que serán expropiadas este chino les pagará esas tierras a precio de catastro y no de mercado.³⁶ ciudades serían afectadas por la pérdida del lago, además de muchas poblaciones menores. Las Isletas de Granada desaparecerían, pues las esclusas levantarían dos metros el nivel del lago.

A este panorama aterrador el presidente Daniel Ortega le ha llamado la "Tierra Prometida". Muchos expertos aseguran que Nicaragua ganaría más vendiendo agua potable que con los ingresos de un canal que hasta dentro de cien años sería suyo.

Con este Canal el país quedará dividido en dos, la Nicaragua del Norte y la del Sur, como hubo dos Alemanias y como hay dos Coreas. Habrá dos poblaciones de animales distintas (a excepción de las

que podrán volar) que irán siendo cada vez más diferentes con el tiempo, lo que perjudicará nuestra biodiversidad.

Solentiname ha sido declarado Monumento Nacional, pero sin el lago no habrá más Solentiname. Una persona de allá ha dicho: “Voy a estar comiendo mucho pescado, porque después ya no habrá más pescado que el enlatado por los chinos”.

Con este Canal el lago de Nicaragua, que para nosotros es una gran bendición de Dios, se convertirá en una maldición. Acabar con el Lago de Nicaragua sería el crimen más grande de la historia de nuestro país, y Ortega pasaría a ser una figura más abominable que William Walker.

Escrito por Ernesto Cardenal en <http://www.laprensa.com.ni/>

PANAMÁ

EMIGRAR ES UN DERECHO HUMANO

Una manifestación de la crisis que carcome la república, es el surgimiento de un grupo de personas que se pronuncian contra el programa “Crisol de Razas” apelando a toda suerte de argumentos xenófobos. Argumentos que hemos escuchado antes en la extrema derecha europea (como Le Pen en Francia) o el Tea Party norteamericano. Se oponen a la regularización del estado migratorio de miles de extranjeros que viven y trabajan en Panamá, aduciendo: que le roban los empleos a los panameños y que son sospechosos de ser delincuentes.

Ambos argumentos son falaces. Quienes así hablan apuntan contra las víctimas e ignoran al victimario. Lo que produce el desempleo en Panamá, así como en los países de origen de esos migrantes: es el injusto sistema capitalista que produce bajos salarios, desempleo y una quiebra de la pequeña y mediana producción urbana y rural.

Lo más gracioso es que muchos de los más furibundos antiextranjeros son a su vez migrantes interioranos, que vinieron de Azuero, Veraguas o Chiriquí hacia la capital por la crisis agraria que el capitalismo produce en el interior. Otros son descendientes directos de quienes vinieron a construir el canal. En últimas, todos, salvo los pueblos originarios, somos migrantes.

Quienes se oponen a la regularización de los migrantes sólo propician mayor sufrimiento a las víctimas: personas que han tenido que dejar la tierra donde nacieron, y a sus familias, porque la globalización capitalista impone la miseria en el Sur y concentra la riqueza en el Norte, a través de sus bancos y sus transnacionales.

Ellos migran tratando de sobrevivir, para no morir de hambre. Para mandar un mendrugo a sus familias. Son personas humildes las que hacen esas filas inhumanas de cuatro días para regularizar su situación y poder trabajar en paz. Los poderosos, los adinerados no hacen esa fila, ellos tienen acceso directo por reglamentos especiales para las empresas transnacionales que pueden llenar un porcentaje de su planilla con extranjeros.

El deseo de vivir explica el drama de los miles de africanos que cruzan el Mediterráneo y los miles de mexicanos y centroamericanos que cruzan el río Bravo y el de nicas, colombianos, peruanos y dominicanos que llegan al Istmo. Negarles la regularización es negarles sus derechos humanos (civiles, sociales, económicos y políticos) para que sean fácilmente explotados por empresarios inescrupulosos sin que puedan quejarse por temor a la deportación. La única manera de defender el derecho al trabajo justo para todos los panameños es que los trabajadores migrantes reciban sus papeles y se igualen los derechos.

Está probado que la mayoría de los delitos graves son cometidos por panameños, con la participación de una minoría de extranjeros, y que los mayores delincuentes, como Pablo Escobar y otros, nunca tuvieron problemas para conseguir su cédula porque se la proporcionaron las corruptas autoridades “panameñas”. Incluso los delincuentes de alta alcurnia llegan invitados por nuestros gobernantes y son sus socios.

Algunos aducen que la campaña es para golpear al ex presidente Martinelli. Absurdo. Se defiende mejor los derechos de los panameños, y se le da donde les duele a los Martinelli et. al., asumiendo una campaña, como ha propuesto el Dr. Mauro Zúñiga, contra el pago de 2.500 millones de balboas de deuda externa a los bancos, en 2015, por parte del gobierno de Juan C. Varela. Ese dinero sí ayudaría a crear empleos para todos, panameños nacidos y adoptados. Así sí se combate a los verdaderos responsables de la miseria del migrante interiorano y extranjero.

Fuente: <http://alainet.org/>

PUERTO RICO

AL BORDE DEL JAQUE MATE

Si Puerto Rico no supera la tendencia a la baja en el empleo, en dos años estará al nivel de la década de los ochenta del siglo pasado y en un par de años más su capacidad para proveer fuentes de trabajo a la gente se habrá retrotraído a las primeras décadas del régimen autonómico, con lo cual habrá quedado destruido el esfuerzo colectivo de más de medio siglo.

Eso deja apenas unos cuantos años para que Estados Unidos ponga en orden la economía de esta colonia caribeña o resuelva su condición política antes de que sea irremediable su descalabro total, en tiempos en que ese tipo de arreglos autonómicos con pueblos sometidos se encuentra bajo fuerte presión en diversas partes del mundo.

Pero aunque ya han surgido voces en EEUU que advierten la necesidad de actuar radical y urgentemente, el tema no parece ser prioridad para Washington, en tanto América Latina insiste en una solución.

Tampoco se hace cargo de la gravedad de la situación –al menos públicamente- el gobierno autonomista, que este verano cerró miles de puestos de trabajo irregulares en la plantilla del propio Estado, aunque ha sido exitoso en prevenir que los informes sobre el tema se difundan mucho.

Pero las estadísticas del propio Gobierno tienen cifras tan contundentes que poco les falta para gritar.

Según la base de datos crudos del Departamento del Trabajo, en septiembre pasado el empleo total bajó a 967.000, que es 79.000 por debajo de diciembre de 2012, al terminar el anterior gobierno anexionista, así como 334.000 desde que estalló la crisis en 2006. La cifra también permitió ver que durante este año 2014 se ha acelerado la pérdida mensual de puestos de trabajo, lo que corresponde a las estadísticas económicas en general.

Para hacer un cálculo de a dónde puede conducir la tendencia, **NCM Noticias** tomó como base las tasas de baja, de la más benigna que es el promedio mensual total durante la crisis, la intermedia que es el ritmo de pérdida de empleos desde enero de 2013 y la más acentuada, que viene a ser el promedio de reducción en 2014. El resultado fue que se puede prever que el primer escenario es de poco más de 877.700 puestos de trabajo al final de 2016, de cerca de 865.400 en el segundo escenario y 805.000 en el pronóstico más grave.

Como la tarea periodística fue prever lo que podría pasar si las cosas siguen iguales, no se tomó en cuenta la posibilidad de eventos extraordinarios que mejoren dramáticamente la economía, ni que las bajas en el empleo puedan seguir acelerándose.

Cualquiera de los escenarios coloca las perspectivas de empleo total de Puerto Rico al final del año 2016 de vuelta a los años 1986-87, en momentos en que Puerto Rico comenzaba a recuperarse de la recesión de principios de los ochenta y en el inicio del largo período de crecimiento económico sostenido, que se hizo añicos en 2006. De hecho, los tres modelos indican que la pérdida neta de puestos de trabajo a lo largo de la crisis habrá acumulado bajas desde más de 423.000 hasta casi medio millón al finalizar el año 2016.

De extenderse las tendencias actuales un poco más, el cálculo correspondiente al cierre de 2018 vendría a ser que en Puerto Rico quedarían apenas 661.000 puestos de trabajo para sostener la población, lo que fue el nivel en el que, en términos generales, estuvo el empleo total desde finales de la década de los cuarenta hasta los primeros años de la década del sesenta del siglo pasado.

Por supuesto, que las posibilidades de que pase algo que saque a Puerto Rico del atolladero económico en que se encuentra deberían aumentar con el paso del tiempo. Eso hace que el pronóstico sea menos preciso cuando se proyecta a más años de distancia.

Las acciones del Gobierno ante esas perspectivas están matizadas por tal nivel de negación que, desde que se planteó la más reciente reforma para atender la crisis fiscal del Estado se proclamó que los ahorros que se planificaban se harían sin despedir empleados irregulares, a pesar de que se estipuló explícitamente eso en el estatuto. Durante meses el Gobierno se ha negado a atender requerimientos de información sobre los despidos, hechos por el periódico El Vocero y **NCM Noticias**, pero las cuentas oficiales ya reflejan que en el período de abril a agosto de este año se eliminaron en el gobierno central más de 6.300 empleos de tipo irregular.

Pero la política de control informativo –con un repertorio que va desde la ocultación hasta la mentira- ha ido perdiendo su efectividad ante la avalancha de medidas impositivas para proteger las asediadas arcas del Estado, así como las presiones crecientes para la entrega de bienes públicos a empresarios aventureros o especuladores. Tampoco ayuda mucho la tendencia mundial, consignada en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, de recuperación económica sin aumentos en el empleo o mejoramiento de las condiciones sociales de los sectores empobrecidos.

Eso va dejando, entre los principales estabilizadores para evitar el tumulto social, factores tales como que continúe aumentando la gente que abandona el país, con la consecuente pérdida del potencial en el capital social o incrementos todavía mayores en las transferencias de dinero desde EEUU, blanco de ataques cada vez más por parte los sectores que opinan que los pobres ya reciben demasiado. Otros estabilizadores para la situación social, aunque son de los más volátiles, vienen a ser el contrabando y la corrupción.

El principal de los estabilizadores, el dominio mismo de parte de EEUU –con la creencia general de que garantiza acceso a la riqueza y protección de la democracia- ha sufrido laceraciones en los últimos años. Han contribuido a eso el repudio a usos militares del país, descrédito de las jefaturas políticas y las elites económicas, así como el retiro del consentimiento a la condición colonial.

Fuente: Jesús Dávila. NCM Noticias

VENEZUELA

VICTIMAS DE LAS GUARIMBAS

Este lunes, se instaló en Caracas el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuo, integrado por familiares de las personas fallecidas durante estos sucesos, el cual anunció que acudirá a todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar “los actos terroristas efectuados por la derecha venezolana”.

Nairobi Oliveros, vocera principal de la organización, informó que el grupo está conformado por víctimas directas e indirectas de todos “los sucesos violentos ocurridos en el país en 2013 y 2014” y acotó que el propósito es dar a conocer sus “historias y sufrimiento”.

Sostuvo que “hay culpables, actores intelectuales y materiales que andan en la calle sonriendo, mientras nosotros llevamos nuestro dolor y pena.

La defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, señaló que las víctimas de las guarimbas desean relatarle al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “su dolor” tras el asesinato de sus familiares en hechos violentos registrados desde 2013.

Añadió que las víctimas de las guarimbas fueron “silenciadas por las grandes corporaciones internacionales de medios”.

Asimismo, se preguntó: “¿Recibirán los relatos de los sobrevivientes de las víctimas de las guarimbas la misma atención de los medios a nivel internacional?”.

Noticias24

VENEZUELA RECHAZA INJERENCIA DEL JEFE DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN CASO DE LEOPOLDO LÓPEZ

En comunicación dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, la Cancillería venezolana expresó su más profundo rechazo a la acción injerencista, irresponsable e irrespetuosa llevada adelante el día miércoles 22 de octubre de los corrientes por el presidente del Gobierno español, señor Mariano Rajoy, al estimular y promover una agenda política de desestabilización contra nuestro país.

A continuación el texto del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, manifiesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, su más profundo rechazo a la acción injerencista, irresponsable e irrespetuosa llevada adelante el día miércoles 22 de octubre de los corrientes por el Jefe de Gobierno español, señor Mariano Rajoy, al estimular y promover una agenda política de desestabilización contra nuestro país al hacer declaraciones públicas emitiendo juicios de valor respecto a nuestro ordenamiento jurídico, vida social y funcionamiento de nuestra democracia.

Para nuestro Gobierno resulta inadmisibles que por su relación partidaria con la extrema derecha venezolana, el señor Rajoy se involucre en una causa judicial seguida de manera independiente y soberana en tribunales venezolanos contra el señor Leopoldo López por delitos públicos y notorios que costaron la vida a más de 40 venezolanos, heridas a un millar, enormes destrozos y un gran desasosiego a nuestro pueblo.

Resulta inaceptable que el Jefe de Gobierno español, en un acto profundamente inamistoso hacia nuestro país, violente el principio de no injerencia y respeto a la soberanía. Con este comportamiento el señor Rajoy y su agrupación partidista reincide en la actitud de intromisión desarrollada por el gobierno del señor Aznar en la pasada administración de este partido, cuando reconoció al gobierno de facto en Venezuela surgido del golpe de Estado perpetrado contra nuestro país en abril de 2002, que pretendió romper el hilo constitucional y sumir a nuestro pueblo en una espiral de violencia, retrogradándonos a regímenes dictatoriales como los que en el pasado padeció el pueblo español.

Estas acciones del señor Rajoy se producen a espaldas de las inmensas mayorías del pueblo español, al cual nos vinculan estrechos lazos históricos y culturales, y al cual siempre hemos brindado cobijo y amistad. Es el mismo pueblo español que sufre los rigores de una crisis sin precedentes, donde se han producido casi 570 mil ejecuciones hipotecarias, que ha causado el suicidio de ciudadanos desesperados, el mismo pueblo español con un 23,67% de desempleo, 5.427.700 parados, un desempleo juvenil de 53,8%, es decir, 842.000 jóvenes, un pueblo que no puede encontrar canales para discutir respecto a las autonomías y un país donde existe una creciente penalización de las protestas contra los recortes.

Todas éstas deberían ser las preocupaciones y el foco de acción del Jefe de Gobierno español, en vez de buscar un protagonismo político que solo tiene eco en la extrema derecha española y sus satélites venezolanos. Nos parece insólito que las consideraciones partidistas del señor Rajoy estén por encima del supremo interés común de mantener cordiales relaciones entre nuestros gobiernos e instituciones y pretendan desconocer el liderazgo constructivo de nuestro país en Latinoamérica y el mundo.

Finalmente queremos reiterar nuestra amistad y profundo afecto por el pueblo español, sus nacionalidades y regiones, así como nuestro apego al principio de no injerencia, respeto mutuo, e

inviolabilidad a la soberanía de los Estados como un principio fundamental de las relaciones internacionales.

Al Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España Madrid